

I AMÉRICA LATINA 2019: VUELTA A LA INESTABILIDAD

I LATIN AMERICAN 2019: RETURN TO INSTABILITY

MÉLANY BARRAGÁN MANJÓN / ANGÉLICA ABAD CISNEROS / JOSÉ MANUEL RIVAS OTERO / LARA GOYBURU / FACUNDO CRUZ / VÍCTOR TRICOT / MARÍA RENEE BARRIENTOS GARRIDO

INTRODUCCIÓN

Tres décadas después de la tercera ola democrática, la cual puso fin a las dictaduras en América Latina, la democracia parece haber entrado en crisis. En los últimos meses, diferentes estallidos sociales han puesto en evidencia la fragilidad institucional de algunos de los países de la región y han desatado numerosas olas de violencia que han puesto en discusión la estabilidad democrática del continente. Durante los últimos meses, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia han experimentado movilizaciones que han puesto de relieve un evidente descontento social. Antes lo habían hecho, entre otros, venezolanos y portorriqueños. Como contraste, otros países como Argentina fueron capaces de gestionar sin violencia el fin de mandato de un gobierno desgastado como el de Macri y celebrar unas nuevas elecciones que, aun polarizadas, antepusieron el respeto a la institucionalidad a la movilización social y la protesta. Pese a que cada uno de los casos requiere de un análisis particular, existen ciertos denominadores comunes en la ola de protestas: el reclamo a los gobiernos por el estancamiento económico, la corrupción, la desigualdad, junto con demandas asociadas a problemas nacionales más específicos.

Aunque la existencia de crisis no es algo novedoso en Latinoamérica, lo cierto es que a lo largo del tiempo se fueron consolidando mecanismos para procesar el conflicto. Así, la mayoría de las acontecidas en la década de 1990 lograron ser superadas institucionalmente y, posteriormente, la bonanza económica derivada del auge en el precio de las materias primas al inicio del siglo XXI, la cual vino acompañada de un giro a la izquierda en el ciclo político, abrió la puerta a una aparente consolidación democrática y a un incremento de la clase media. Como principales excepciones a esas décadas de democratización, cabe recordar el golpe de Estado que dio el presidente Alberto Fujimori en Perú en 1992, el golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en 2002 y el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras en junio de 2009. Estas experiencias sirvieron como recordatorio de que esas cosas aún podían formar parte de la realidad latinoamericana, pese a considerarse experiencias extraordinarias difícilmente extensibles a toda la región.

No obstante, la crisis de las materias primas marcó un punto de inflexión. La economía no fue la única que se resintió, sino que conflictos que hasta ese momen-

to se habían mantenido bajo un relativo control, estallaron. Las fallas estructurales que afectan a América Latina, tales como la corrupción, el hiperpresidencialismo o la debilidad institucional, volvieron a aflorar tras más de una década de aparente estabilidad que atenuó el conflicto social y generó expectativas positivas entre la población.

LAS RAZONES DE LA INESTABILIDAD

Las razones para explicar la actual crisis son varias, pero quizás la que marca un punto de inflexión respecto al pasado es el cambio en la estructura social. Tras más de una década de crecimiento sostenido, con gobiernos de izquierda que tomaron medidas para disminuir la desigualdad, la clase media latinoamericana adquirió una dimensión que nunca antes había logrado. La mejora en el nivel adquisitivo de los latinoamericanos vino acompañada de mejoras en la educación y de aspiraciones de bienestar económico, a la seguridad y al reconocimiento de derechos y libertades individuales. Sin embargo, no se produjeron cambios en la matriz productiva ni medidas profundas de (re) distribución, con lo que tras la caída del precio de las materias primas, ha sido complicado mantener a gran parte de esa nueva clase media. Esto genera una fuerte frustración, ya que esa nueva clase media teme perder su estatus y, por ello, sale a las calles a reivindicar la permanencia de los logros adquiridos.

Pero, además del incremento en el tamaño de la clase media, los elevados ingresos provenientes de las materias pri-

mas también tuvieron un efecto en la manera en la que el Estado interactuaba con la sociedad civil. En lugar de buscar el consenso y la cohesión social a través de procedimientos democráticos o negociaciones, el Estado empezó a aplicar la transferencia de recursos con los sectores más conflictivos en la movilización. La consecuencia fue el debilitamiento de los mecanismos de negociación y la incapacidad de llegar a acuerdos cuando el Estado dejó de percibir altos ingresos por las materias primas.

Junto con los cambios en la estructura social, existen razones ligadas al debilitamiento institucional progresivo de las democracias latinoamericanas. Así, durante el llamado giro a la izquierda, muchos de los procesos políticos fueron encabezados por líderes personalistas que se resistieron a delegar en otros la continuidad de sus políticas y que, en algunos casos, llegaron a pasar por alto restricciones constitucionales. Quizás el ejemplo más emblemático sea Venezuela, pero existen otros como Ecuador, Bolivia o Nicaragua. El resultado fue una erosión gradual de la democracia ya que, para incrementar su poder, estos líderes fueron generando reglas de juego desiguales que dejaban a los partidos de oposición en una situación de debilidad y que restaban autonomía a las instituciones del Estado. Con discursos populistas, algunos de estos líderes se apropiaron del concepto democracia, otorgándole significados específicos que no son compartidos por todos los actores políticos. Por último, el papel de las Fuerzas Armadas también ha sido determinante y ha puesto de manifiesto la debilidad de los gobiernos latinoamericanos. En situaciones de crisis, líderes y partidos

se han mostrado incapaces de resolver los problemas y han recurrido al ejército para procesar el conflicto. Pero esto no es todo, ya que antes de la crisis ya se había producido una politización de los militares.

Si bien en el pasado las Fuerzas Armadas intervenían, mediante golpes de Estado, para tomar el poder con sectores que no ganaban las elecciones, ahora son convocadas por los ganadores para reforzar sus propios proyectos. Así, por ejemplo, Hugo Chávez convirtió al ejército venezolano en un instrumento de mediación para la ejecución del proyecto bolivariano y empoderó considerablemente a los militares. En otros países, como Ecuador, se incrementaron las partidas presupuestarias de las Fuerzas Armadas y reforzó la participación del Ministerio de Defensa en tareas de inteligencia y gestión de riesgos.

De este modo, el impacto de la crisis económica en la estructura social, la erosión democrática derivada del fuerte hiperpresidencialismo y el papel cada vez más activo de las Fuerzas Armadas, unido a otros problemas estructurales como la corrupción o las deficiencias en la estructura productiva, generaron el caldo de cultivo para la ola de protestas que ha afectado a América Latina durante 2019.

MODELOS DE CRISIS

Desde el inicio de 2019, América Latina se ha visto expuesta a diferentes movilizaciones y protestas. Pese a que, tal como se ha señalado, existen casuísticas comunes a todos los casos, pueden identificarse algunas diferencias que permiten hablar de distintos modelos de crisis. Por un lado, hubo un grupo de movilizaciones que tu-

vieron como objetivo último la dimisión del jefe del Ejecutivo y la celebración de nuevas elecciones. Dentro de este grupo, se encuadran los casos de Venezuela y Puerto Rico. Los venezolanos salieron a la calle a inicios del 2019 pidiendo la renuncia de Nicolás Maduro y la celebración de nuevas elecciones. La ola de protestas culminó con la autoproclamación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino. Meses después, en el mes de mayo, la oposición volvió a salir a las calles con un frustrado levantamiento cívico militar. En noviembre se produjeron nuevas marchas exigiendo la dimisión de Maduro. Por su parte, los portorriqueños se movilizaron durante el mes de julio, exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras una serie de escándalos que habían desembocado en una crisis política. Rosselló dimitió, pero la crisis se prolongó en el tiempo por el nombramiento inconstitucional de Pedro Pierlusi y no fue zanjada hasta el nombramiento de la actual gobernadora, Wanda Vázquez.

Un segundo grupo lo constituyen las protestas que ponen el foco en la debilidad de instituciones y mecanismos de garantía democrática. Es el caso de Perú, donde la gente salió a la calle para mostrar su oposición a la disolución del Congreso, y Bolivia, donde el estallido social se produjo por la sombra de un posible fraude electoral. En Perú, el 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso debido a la denegación de la cuestión de confianza. Tras la disolución, hubo marchas en las que se denunciaba que el presidente había actuado de manera dictatorial. Pese a que se trató de impulsar una moción de

incapacidad temporal del presidente, esta no prosperó y la Cámara legislativa sigue disuelta. En el caso de Bolivia, el estallido social se produjo después de conocer los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Ante la sospecha de presuntas irregularidades y fraude electoral, los bolivianos salieron a la calle para protestar y, horas después de que el entonces presidente Evo Morales convocara nuevas elecciones, la Fuerza Pública le obligó a renunciar de su cargo.

Por último, existe un tercer grupo de movilizaciones que responden, ante todo, a una posición crítica respecto a las políticas económicas y sociales de los gobiernos. Pese a que incluían otras demandas transversales, las marchas en Ecuador, Chile y Colombia han puesto el acento en aspectos como el desempleo, las pensiones, el coste de servicios públicos o la eliminación de subsidios. Dentro de este grupo, Ecuador fue el primer país en salir a la calle. Tras el anuncio del presidente Lenin Moreno de la eliminación de los subsidios a los combustibles, se desató una ola de protestas que denunciaban las medidas neoliberales del Ejecutivo. En Chile, las movilizaciones se iniciaron tras la subida del precio de los billetes del metro de Santiago y acabaron denunciando la desigualdad estructural que afecta al país andino. Por último, el 21 de noviembre diferentes sectores convocaron un paro nacional en señal de protestas contra el aumento del desempleo y las posibles reformas del gobierno en materia de pensiones, trabajo y tributación.

Los diferentes tipos de crisis, no obstante, se enmarcan dentro de un esquema general de hartazgo y escepticismo dentro de la sociedad latinoamericana.

El delicado momento económico que vive la región ha generado entre la población el miedo a vivir una segunda “década perdida”, unido a la sensación de que muchas de las expectativas creadas en los últimos años se han visto frustradas, ha dado lugar a ciudadanos menos tolerantes con sus gobiernos. Los niveles de aprobación gubernamental han caído estrepitosamente en los últimos tiempos y la sociedad cada vez es más crítica con la desigualdad y la corrupción. Todo ello ha dado lugar a diferentes olas de protestas que reivindican políticas igualitarias, transparentes y acordes a las necesidades reales de la sociedad.

EL SALDO DE LAS MOVILIZACIONES

La ola de protestas vividas durante todo el año 2019 ha tenido saldos positivos y negativos. Por un lado, has demostrado el poder de la sociedad civil y su capacidad para organizarse y denunciar prácticas y políticas ante las que se muestran en desacuerdo. Asimismo, ha evidenciado como la nueva clase media no quiere perder su condición socioeconómica y lucha para no caer de nuevo en la bolsa de pobreza. Por último, la denuncia social también demuestra una nueva cultura política mucho más intolerante que en el pasado frente a la corrupción y el fraude.

No obstante, la cara negativa de todo este fenómeno de movilización han sido los daños humanos derivados de la acción social y la intervención de las Fuerzas de Seguridad en el manejo del conflicto. En Venezuela, el Alto Comisionado de Na-

ciones Unidas para el Desarrollo Humano informó de la existencia de 850 detenidos –77 de ellos menores de edad– y 40 fallecidos a fecha de 29 de enero de 2019. Posteriormente, en el mes de abril, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social aumentó la cifra de muertos a 51. En Ecuador, el balance de las protestas se saldó, según datos de la Defensoría del Pueblo, con 8 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos. En Chile, el Gobierno cifró en 22 fallecidos y 2.200 heridos las protestas. En Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado 23 muertos y 715 heridos durante las jornadas de movilización. Por último, en Colombia las jornadas de protesta se han saldado con 3 muertos y 250 heridos. Asimismo, junto con los heridos y fallecidos, las protestas han puesto en jaque la estabilidad política e institucional de los diferentes Estados, así como la incapacidad de los gobiernos para procesar el conflicto, agregar demandas e incorporar mecanismos de negociación y cohesión social.

EL FUTURO DE LA REGIÓN

La incertidumbre es el principal rasgo que define a América Latina en la actualidad. Tras la ola de protestas, es difícil pronosticar el derrotero que van a seguir los diferentes gobiernos y la efectividad de las propuestas planteadas para la resolución de los conflictos. La necesidad de cambios estructurales y los condicionantes tanto internos como externos que afectan a las diferentes democracias de la región, dificulta la posibilidad de hacer predicciones certeras.

Sin embargo, el análisis de las protestas permite identificar algunas nuevas tendencias en la región. La primera de ellas es un cambio en la corriente pro-mercado impulsada por los gobiernos conservadores que llegaron al poder tras el fin del giro a la izquierda. No obstante, los compromisos adquiridos por algunos Estados con el Fondo Monetario Internacional requieren de medidas que en ocasiones entran en conflicto con las aspiraciones redistributivas y el gasto social que reclama una gran parte de la población.

Sea como fuere, la actual situación económica requiere abandonar la idea de que los mercados tienen capacidad para autorregularse y solventar todos los problemas. Es necesaria la introducción de mecanismos de control y el cambio en las estructuras productivas, apostando especialmente por la innovación tecnológica. Por otro lado, es importante implantar reformas tributarias y una cultura fiscal que permita hacer frente a los gastos del Estado.

En segundo lugar, el estallido social ha puesto de manifiesto que los problemas de América Latina no pueden resolverse únicamente con discursos populistas a la vieja usanza. La opinión pública de hoy en día es mucho más crítica y está más informada, mostrando niveles de tolerancia mucho más bajos hacia la corrupción y la mala praxis de sus gobiernos. La frustración económica y años de promesas incumplidas ha movilizado a la sociedad y le ha empujado a buscar nuevas alternativas.

Por último, el sistema político ha perdido legitimidad y tanto partidos como instituciones necesitan reinventarse. La democracia en América Latina

debe de acercarse más a los ciudadanos y abrir nuevos canales de participación que permitan canalizar la iniciativa ciudadana y obligar a los poderes del Es-

tado a pronunciarse sobre las demandas sociales.

MÉLANY BARRAGÁN MANJÓN

LAS PROTESTAS DE OCTUBRE DE 2019 EN ECUADOR: PRECARIEDAD ECONÓMICA, DESCONTENTO SOCIAL Y DEBILIDAD POLÍTICA

El 1 de octubre de 2019 Lenin Moreno, presidente de Ecuador, anunció en cadena nacional una serie de medidas económicas destinadas a dinamizar la economía y a reducir de manera drástica el gasto público. La más severa, por su inmediata entrada en vigor y por la forma en la que afectaría al conjunto de la ciudadanía, fue la eliminación de los subsidios a la gasolina y al diésel asegurando al sector público un ahorro de 1.300 millones de dólares. El gobierno pretendió aliviar el impacto de esta medida ampliando el número de beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas (bonos) e incrementando su valor. Adicionalmente, se propuso quitar el pago anticipado del impuesto a la renta, reducir a la mitad las vacaciones de los empleados públicos para equipararlas con las del sector privado (15 días al año), hacer que los trabajadores de empresas públicas aporten al Estado con un día de su salario al mes, flexibilizar el mercado laboral a través de la introducción de nuevas formas de contratación, e incentivar la producción mediante la eliminación de tasas y aranceles para equipos y maquinaria.

El conjunto de las medidas fue calificado por expertos y académicos como drástico, pero realista y necesario para corregir los grandes vicios de la economía

ecuatoriana, a saber: un Estado excesivamente endeudado con un gasto público demasiado grande, y un sector privado poco competitivo por los altos costos de producción en una economía dolarizada y un mercado laboral rígido. No obstante, aun cuando los motivos que llevaron a Moreno a realizar este anuncio estaban claros y contaban con sustento técnico y académico, la eliminación de los subsidios actuó como catalizador del descontento de la ciudadanía con el ejercicio de la política y se interpretó como una forma de trasladar al pueblo la responsabilidad de un problema generado por el mal manejo de la economía y por los altos niveles de corrupción que hubo durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y del cual Moreno formó parte.

Así, el reclamo por la restitución de los subsidios se convirtió en el eje principal de las movilizaciones. Estas se iniciaron el 2 de octubre con un paro nacional de transportistas y se prolongaron durante once días bajo el liderazgo del movimiento indígena. En este periodo el país vivió momentos de alta tensión y escalada de violencia que dejaron un saldo de 8 fallecidos, 1.340 heridos, 1.192 detenidos—de los cuales el 50% eran jóvenes entre 15 y 25 años—, destrucción de bienes muebles e

inmuebles (públicos y privados) y pérdidas económicas por valor de 2.400 millones de dólares, según informaron la Defensoría del Pueblo y la Cámara de Comercio de Guayaquil. El cese de los enfrentamientos solo fue posible con la restitución de los subsidios y la apertura de una mesa de diálogo integrada por representantes del gobierno y del movimiento indígena.

Más allá de que la dureza de este tipo de medidas tenga como consecuencia esperable el rechazo y consecuente protesta ciudadana, es importante señalar que Ecuador se caracteriza por tener una sociedad movilizada. Desde el retorno a la democracia en 1979, la ciudadanía ha salido a las calles para expresar su descontento con el gobierno o con la política pública, llegando a legitimar las salidas forzadas de varios presidentes entre 1997 y 2005. Incluso cuando en la última década el Estado criminalizó y silenció la protesta para evitar que esta adquiera proporciones masivas, el movimiento indígena, los movimientos estudiantiles y el movimiento ecologista realizaron algunos levantamientos. Después de los acontecimientos ocurridos en octubre se puede decir que la sociedad civil ha recuperado su fuerza y activismo.

Los once días de protesta que protagonizaron los ecuatorianos en octubre deben analizarse a la luz de las dimensiones económica, política y social que configuran la actual crisis que se vive en el país. La primera está relacionada con las presiones macroeconómicas que demandan una reestructuración del Estado y que chocan con los intereses de un porcentaje importante de la población que vive en una situación precaria. La segunda atañe a la debilidad de un Ejecutivo que gobierna sin

una mayoría estable en la Asamblea Nacional, y a una oposición incapaz de canalizar las demandas de la ciudadanía. La tercera es la expresión violenta del descontento ciudadano con los resultados y el funcionamiento de la democracia y que parece erosionar los principios de tolerancia, pluralismo y apego al Estado de derecho.

LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA CRISIS: LOS GRILLETES MICRO Y MACROECONÓMICOS

Ecuador se encuentra en una situación económica muy delicada. En 2014, como consecuencia de la caída en los precios del petróleo, el gobierno empezó a contraer obligaciones mediante la emisión de bonos a altas tasas de interés. Como consecuencia, el peso de la deuda pública con relación al PIB pasó del 20% en 2013 al 45,78% en 2018. De acuerdo con profesionales y académicos reunidos en torno al Foro de Economía y Finanzas en 2018, la mayor parte de los ingresos generados en el país como consecuencia de la emisión de deuda se ha destinado para solventar un gasto público ineficiente, centrado en mantener el aparato burocrático sin un interés real por implementar políticas de reactivación económica que fomenten la producción y atraigan la inversión en el sector privado.

Desde la década de 1970 los subsidios a los combustibles han incrementado progresivamente su peso dentro del gasto público, en 2018 el déficit fiscal acumulado por este rubro ascendió a 40.000 millones de dólares. A pesar de las advertencias realizadas por organismos internacionales y analistas económicos de lo insostenible de este modelo, hasta el 1 de octubre de 2019

ningún presidente había sido capaz, o había tenido la voluntad política, para retirarlos. Junto con los programas de transferencias condicionadas que se iniciaron en 1998, estos se han asumido como una obligación de los gobernantes para con los grupos más vulnerables de la población.

Un número importante de ecuatorianos mantiene una situación económica precaria. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2018 el 45% de la población económicamente activa trabajaba de manera informal y el 4% se encontraba desempleada. El grueso de este grupo pertenecía al 23% de personas que vivían bajo la línea de pobreza con un ingreso mensual promedio de 84,72 dólares. Para este estrato de la población que, según los reportes del propio INEC, destina el 40% de sus ingresos a gastos de alimentación y el 9% a gastos de transporte, cualquier incremento en los precios de la gasolina implica agravar sus condiciones de vida.

El anuncio del incremento del número de beneficiarios de los bonos del Estado y del aumento de su valor en 15 dólares no fue suficiente para tranquilizar a la ciudadanía. De hecho, la medida se queda corta si se considera que solo el 6% de la población tiene acceso a estos programas. Esto explica que el rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno haya tan sido masivo y contundente.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA CRISIS: GOBIERNO DÉBIL Y FLACA OPOSICIÓN

Al iniciar su mandato en mayo de 2017 Moreno contaba con un 70% de aproba-

ción ciudadana. Esto le permitió romper relaciones con su predecesor y compañero de partido, Rafael Correa, aislar y facilitar el procesamiento judicial de su compañero de fórmula, el vicepresidente Jorge Glas, y pactar con otras fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. No obstante, a pesar de los altos niveles de legitimidad, Moreno mantuvo la misma línea de política económica que el gobierno anterior. Ello le costó el apoyo que inicialmente había recibido por parte de la derecha en la Asamblea Nacional, pero también pasó factura entre sus bases pues la tibieza de sus decisiones se interpretó como una falta de voluntad para generar los cambios requeridos por el país. Esto, sumado a los escándalos de corrupción asociados tanto a su gobierno como al de Correa terminaron por desgastar al presidente que en mayo de 2019 presentaba solo un 26% de aprobación.

Frente a la progresiva pérdida de apoyos del oficialismo, la oposición ha tenido un papel intrascendente. En una Asamblea Nacional pasiva, caracterizada por una baja tasa de producción legislativa, el correísmo se ha convertido en la principal fuerza de oposición. El bloque de la “Revolución Ciudadana”, que reúne a 74 de los 137 legisladores, ha buscado bloquear —algunas veces con éxito— todas las iniciativas del Ejecutivo. Su estrategia ha consistido en deslegitimar a los miembros del gabinete y de la bancada oficial, así como a todas sus propuestas calificándolas como traicioneras, vendepatrias y al servicio del capital. Sin embargo, la avalancha de denuncias contra Correa y sus colaboradores que los vinculan con un sinnúmero de casos de corrupción (cohecho, malversación de fondos, tráfico

de influencias, entre otros) y de presuntas violaciones a derechos humanos han mermando de forma significativa su capacidad de movilización y convocatoria.

Conforme se aproximan las elecciones generales de 2021 políticos y partidos de ambos lados del espectro ideológico han empezado a reflejar los viejos vicios de la política ecuatoriana caracterizada por una visión cortoplacista y rentista del ejercicio público. Así, en el último año, tránsfugas de diversas bancadas han incrementado en la Asamblea Nacional, legisladores y líderes de los partidos han recrudecido las críticas al gobierno y han bloqueado con mayor fuerza iniciativas que les pueden resultar contraproducentes. Y, sobre todo, han evitado posicionarse públicamente o plantear alternativas de acción sobre cuestiones polémicas como las propias manifestaciones de octubre exigiendo que sea el Ejecutivo quien ponga sobre la mesa las alternativas de solución.

En este escenario no queda muy claro por qué un gobierno débil decidió apostar por un paquete de medidas que a todas luces significarían un suicidio político a las puertas de un año electoral. La tibieza de Moreno durante la primera mitad de su mandato contrasta con la actitud de mano dura que intentó reflejar durante las jornadas de protesta al mover la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, declarar el estado de excepción y establecer toques de queda en todo el país. De igual manera, la oposición tuvo un flaco papel durante estas jornadas. El silencio de la Asamblea frente a la escalada de violencia fue llamativo, al igual que resultó contradictorio el hecho de que el movimiento indígena se tomara el pleno de un Legislativo totalmente vacío.

Entre los parlamentarios solamente destacaron unas cuantas voces aisladas de la bancada correísta que abogaron por la destitución del presidente antes de pedir asilo en la embajada mexicana. La derecha tampoco estuvo presente en el debate nacional, el líder de CREO (la segunda fuerza de oposición) se limitó a publicar un par de videos en redes sociales criticando las medidas adoptadas por el oficialismo y llamando a la paz, y los líderes del partido socialcristiano (tercera fuerza política del país) se atrinchieron en la ciudad de Guayaquil, su feudo electoral, con una actitud beligerante hacia los protagonistas del paro. Asimismo, a nivel subnacional fue evidente la debilidad de las instituciones y la incapacidad de las autoridades de lidiar con las diversas expresiones de la protesta.

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA CRISIS: DESCENTEN- TO Y DESAPEGO HACIA LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA

De acuerdo con el último reporte del Barómetro de las Américas (LAPOP), hasta marzo de 2019 el 60% de los ecuatorianos consideraron que la economía era el principal problema del país y el 49% afirmó que su situación económica personal había empeorado en el primer trimestre del año. Por ello no es de extrañar que los resultados de dicha encuesta reflejen los niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia más bajos de los últimos doce años (39%) y que también se observe un descenso en los niveles de

apoyo al sistema político (54% en 2019 frente al 68% en 2014).

En este contexto, redes sociales y medios alternativos de comunicación han sido el canal a través del cual se han elevado las principales críticas contra el gobierno, los partidos y la política en general. Estos espacios han sido testigos de la proliferación de noticias falsas (*fakenews*) que, junto con los denominados “memes” políticos, han contribuido a exacerbar y dividir a la opinión pública. De esta manera la confrontación de ideas y posturas políticas que en democracia deberían promover un diálogo respetuoso ha sido desplazado por la descalificación del adversario y la intolerancia hacia “los otros”.

Al analizar los discursos presentes en las redes sociales se puede observar que Ecuador se ha convertido en el país en donde nada vale: todos los políticos son corruptos y sus propuestas siempre encierran algún interés oculto; si la medida viene del gobierno es imperialista y neoliberal; si la propuesta se origina en los movimientos sociales es ilusa e inviable. La generalización de los defectos está muy arraigada en las prácticas sociales y esto ha generado un problema identitario que separa al país entre muchos pueblos y sus respectivos antagonistas.

A este descontento permanente se debe sumar la exteriorización de prejuicios que vienen desde tiempos coloniales y que tienen que ver con un racismo latente y una intolerancia hacia la diversidad que se transparentaron durante las jornadas de protesta. Entre los que apoyaron las medidas del gobierno hubo voces conminando a los indios (o a la *indiada*) a “ponerse en su lugar”. Entre los que apoyaron las movilizaciones hubo quienes

acusaron a todos los blancos de querer seguir enriqueciéndose a costa del pueblo. Las mujeres fueron feminazis si pertenecían al movimiento feminista y participaron en las protestas, sumisas e hipócritas si se manifestaron en nombre de la Revolución Ciudadana, o mandadas a callar y enviadas a la cocina si fueron portavoces del gobierno.

Al examinar las acciones y reacciones que desencadenaron las protestas del pasado octubre queda claro que en un entorno de crispación la tolerancia, el pluralismo y el respeto al Estado de Derecho quedan desplazados. Ninguno de los actores protagonistas del paro de octubre se ha responsabilizado por los más de cuatrocientos heridos miembros de las fuerzas del orden, los saqueos y destrucción de propiedad privada, los daños de bienes patrimoniales, la fabricación de armas caseras, el asalto y destrucción de instituciones como la Contraloría General del Estado, la toma de rehenes en diversos puntos del país, el desabastecimiento fruto del bloqueo de vías, la destrucción de medios de comunicación, los ataques a plantas de agua potable y antenas de telecomunicaciones, entre otros actos violentos que caracterizaron la protesta del lado de los manifestantes.

CONCLUSIÓN

Podría decirse que la geografía accidentada y volcánica de Ecuador calza bien con el humor de su población y su capacidad de contener la presión durante un periodo de tiempo indeterminado para luego liberarla a modo de explosiones de diversa magnitud. En este caso, los ecuatorianos

explotaron en octubre y las causas de esta explosión no son solo económicas, sino también sociales y políticas. El carácter masivo de las protestas de octubre en Ecuador sirvió para exteriorizar el descontento de gran parte de la ciudadanía con la gestión del gobierno, con las medidas económicas, pero también con el funcionamiento del sistema y con la gestión de todo el espacio público. Entre las personas de escasos recursos, las poblaciones histó-

ricamente marginadas como los pueblos indígenas y afrodescendientes, y entre los más jóvenes este descontento se manifestó en la confrontación con la fuerza pública, en la agresión hacia instituciones civiles como los medios de comunicación y en la vulneración de espacios públicos simbólicos como la Asamblea Nacional o la Contraloría General del Estado.

ANGÉLICA ABAD CISNEROS

DEMOCRACIA Y CRISIS DE REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA

El mundo está en crisis. Cuando parecía que la economía global se estaba recuperando del *crack* financiero de 2008, algunos expertos vaticinan una nueva crisis económica para 2020, acentuada, entre otros factores, por las tensiones comerciales de Estados Unidos con China y la Unión Europea, el Brexit, y la desaceleración de las economías asiáticas. A los problemas económicos hay que sumar otros desafíos globales como la emergencia climática, las crisis migratorias, y la reciente ola de protestas sociales contra los gobiernos en lugares tan distintos como Argelia, Bolivia, Cataluña, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, El Líbano, Francia, Haití, Hong Kong, Irak, Irán, Malta y Sudán.

Este artículo tiene como objetivo ahondar en las posibles causas de este escenario de crisis política que se está manifestando a través de la acción colectiva contenciosa, poniendo el foco en el caso de Colombia. En primer lugar se argumenta la hipótesis de que protestas sociales son el resultado de una nueva crisis de

representación que tiene su origen en la vieja tensión entre democracia y liberalismo. En segundo lugar, se examina esta hipótesis a la luz de la actual crisis política en Colombia, haciendo una lectura histórica de la situación del país. Por último, se proponen algunas posibles soluciones políticas para el caso colombiano que también podrían ser aplicadas en otros contextos.

DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN

Las democracias actuales se fundamentan en dos tradiciones políticas diferentes y en ocasiones contradictorias: la democracia y el liberalismo. La tradición democrática tiene su origen en la Atenas del siglo v a.C. En la democracia clásica los ciudadanos, reunidos en la asamblea popular, participaban directamente en la toma de decisiones públicas, mientras que los titulares de las magistraturas (que ejecutaban las decisiones de la asamblea)

y los tribunales eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos que se presentaban como voluntarios o, en menor medida, por elección popular.

La tradición liberal, por su parte, cristalizó con las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, que pusieron fin al absolutismo hereditario e instauraron un nuevo tipo de régimen, el gobierno representativo, basado en el consentimiento del pueblo. Si bien los artífices de las instituciones representativas establecieron al comienzo el sufragio censitario, condicionando el voto a atributos como la riqueza, la educación o la propiedad de la tierra, con la extensión del sufragio universal y la aparición de los partidos de masas a finales del siglo XIX surgió la democracia representativa, que permitió el acceso a la política de sectores sociales anteriormente excluidos.

Las tradiciones democrática y liberal tienen dos visiones muy distintas de entender la democracia. La primera adopta, recurriendo a la terminología de William H. Riker, un enfoque populista o roussoniano y fundamenta la democracia en la conexión entre las decisiones colectivas y las preferencias individuales. Por el contrario, la visión liberal o madisoniana, expresada por Joseph Schumpeter, concibe a la democracia como un mecanismo para seleccionar a los gobernantes.

CONCEPCIONES LIBERAL Y SUSTANTIVA DE LA REPRESENTACIÓN

La visión liberal tiene un peso decisivo en cómo se conciben las democracias

actuales. Sin embargo, la tradición democrática o populista continúa vigente, no solo en las teorías políticas que proponen modelos democráticos alternativos o complementarios como el participativo o el deliberativo, sino también en el funcionamiento mismo de las democracias representativas. Principios de esta tradición como el autogobierno y la soberanía popular se recogen en los textos constitucionales y forman parte del núcleo de lo que hoy se entiende como democracia.

Desde los orígenes del gobierno representativo la tradición populista ha defendido su propia concepción de la representación política. Mientras que en el liberalismo el mandato representativo se basa en la autorización por medio del voto del elector a su representante y en la necesidad de que el último rinda cuentas ante el primero (lo que Hanna Pitkin llama las dimensiones de autorización y responsabilidad), la teoría democrática entiende la representación como la identidad sociodemográfica e ideológica de los representantes con la ciudadanía (que coinciden con las dimensiones espejo e identificación simbólica de Pitkin).

Si en la teoría liberal la representación es el resultado de un conjunto de procedimientos y reglas de juegos, para la tradición democrática la representación es un principio sustancial basado en la semejanza social entre representantes y representados. Como subraya Manin, estas dos formas de concebir la representación aparecieron por primera vez en la Convención de Filadelfia de 1787, de la mano de los federalistas, que defendían una concepción liberal de la representación,

y los anti-federalistas, que abogaban por una representación sustantiva. Aunque la visión de la representación que tenían los federalistas finalmente se impuso en el texto constitucional estadounidense, la concepción sustantiva se retomó a comienzos del siglo xx con el auge de los partidos de masas y se mantiene hasta nuestros días.

CRISIS DE REPRESENTACIÓN

La crisis de la representación que experimentan las democracias contemporáneas está vinculada a las concepciones liberal y populista de la representación política. Si bien es cierto que el procedimiento electoral como mecanismo de selección de cargos políticos tiene actualmente mucha aceptación social, tanto así es la fuente de legitimidad de la mayor parte de los gobiernos contemporáneos (incluso de las dictaduras), la concepción liberal de la representación, fundamentada en el voto, no ha sido suficiente para garantizar que la ciudadanía se sienta representada.

Actualmente, los electores no se conforman con autorizar con el voto y esperar que sus representantes rindan cuentas ante ellos, sino que exigen que la democracia tenga resultados que se correspondan con sus expectativas, y sienten que es más probable que esto ocurra cuando las personas que les representan se parecen social o ideológicamente a ellos. Esto último no es un capricho sino una exigencia válida. A la hora de depositar el voto, la ciudadanía identifica al candidato de su preferencia porque percibe en él una serie de valores, principios, creencias (en defi-

nitiva una ideología) y, en ocasiones, incluso rasgos sociodemográficos, y espera que estos se reflejen en su posterior conducta en el seno de las instituciones. La desconexión entre la ideología o los rasgos sociodemográficos del representante y las decisiones que este toma puede provocar desafección política, falta de apoyo al régimen democrático, insatisfacción con la democracia, descontento político, pérdida de confianza en los representantes públicos y en las instituciones (especialmente en los partidos políticos), o percepción de no ser correctamente representado, todos ellos fenómenos asociados a la crisis de representación.

El debilitamiento de los partidos de masas a partir de la década de 1960, la globalización económica y cultural, el auge de la economía financiera, la hegemonía del neoliberalismo (ideología que propone dejar en manos de expertos los asuntos económicos), y la relevancia cada vez mayor de los medios de comunicación y del marketing político en las campañas electorales, son fenómenos que están contribuyendo a incrementar la brecha entre liberalismo y democracia al interior de los sistemas democráticos.

Una de las consecuencias más visibles de la crisis de representación ha sido la pérdida de apoyo electoral de los partidos políticos tradicionales y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas o de candidaturas *outsiders*. No obstante, cuando estos nuevos actores (que a veces no son tan nuevos sino que proceden de los mismos partidos tradicionales) alcanzan el poder pueden, bien cambiar por las vía de hecho o vulnerar las reglas de juego para poder implementar sus pro-

gramas políticos, poniendo en riesgo los principios de la representación liberal; o bien encontrarse con dificultades para articular políticas públicas que sean coherentes con su ideología política, incumpliendo así con la representación sustantiva.

La última de las situaciones mencionadas conduce a los países democráticos a un círculo vicioso: la falta de representación sustantiva desemboca en una crisis de representación, esta crisis deslegitima a los actores políticos tradicionales y aúpa a nuevos actores, estos últimos no son del todo coherentes con las promesas de su programa, surge una nueva crisis de representación, y así indefinidamente. Lo más preocupante es que la única forma que encuentran algunos actores políticos para cerrar el círculo es afectando las reglas de juego, lo que pone en peligro al propio sistema democrático. A continuación se examina el caso de la crisis de representación en Colombia para proponer, a partir del mismo, posibles soluciones para salir de ese círculo evitando afectar a alguno de los principios de la democracia representativa.

COLOMBIA, UN RÉGIMEN POLÍTICO ALGO LIBERAL Y ESCASAMENTE DEMOCRÁTICO

A menudo se menciona que el caso de Colombia representa una paradoja política: es una de las democracias electorales más estables de América Latina, con elecciones y mandatos presidenciales ininterrumpidos desde 1958, pero a la vez mantiene un nivel muy alto de violación de derechos y libertades fundamen-

tales, resultado de más de medio siglo de violencia política y conflicto armado interno.

A simple vista, la estabilidad electoral e institucional de Colombia puede hacer pensar que es una democracia representativa que cumple con los principios básicos del liberalismo, pero una mirada más profunda sobre el funcionamiento político del Estado colombiano muestra que, si bien cuenta con instituciones representativas estables (mandato representativo) y realiza elecciones libres y periódicas (elección), no siempre ha podido o ha querido garantizar los derechos y libertades públicas de sus ciudadanos, sobre todo los de aquellos que viven en las zonas periféricas del país. Asimismo, adolece de pluralismo político porque la violación sistemática de los derechos fundamentales por parte del Estado y los actores armados ilegales han puesto trabas a la deliberación y al debate público, una de las dimensiones de la poliarquía según la famosa obra de Robert Dahl.

Si el cumplimiento de los principios liberales en Colombia ha sido precario, el desarrollo de los principios de autogobierno, soberanía popular y participación del pueblo en la toma de decisiones, propios de la teoría democrática o populista, ha sido prácticamente nulo, a pesar de que están reconocidos formalmente en la Constitución de 1991.

Durante el siglo xx los movimientos populistas o nacional-populares fueron los que abanderaron las luchas democráticas en América Latina e integraron a las masas al sistema político, como hicieron los partidos socialdemócratas en Europa. En Colombia, esta tradición populista estuvo ausente y esto se debió,

según Marco Palacio, a su historia constitucional y antimilitarista, que frustró la consolidación de liderazgos personalistas en contraste con el resto de países andinos. A pesar de haber contado con movimientos populistas importantes, como el de Jorge Eliécer Gaitán o la ANAPO del ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, estos fueron abortados. Gaitán fue asesinado en 1948 y la ANAPO desplazada de la victoria presidencial tras un fraude electoral en 1970. Por el contrario, los antipopulistas partidos conservador y liberal se convirtieron, en palabras de Mainwaring y Scully, en “los principales guardametas en cuanto a quién accede al gobierno”, al menos hasta comienzos del siglo XXI.

LA CRISIS EN COLOMBIA, UNA MIRADA RETROSPECTIVA

Después de las crisis en Ecuador, Chile y Bolivia en octubre y noviembre de 2019, Colombia fue el siguiente país en sumarse a la ola de protestas contra los gobiernos. El 21 de noviembre más de cien organizaciones sociales y sindicales convocaron un paro nacional contra el ejecutivo de Iván Duque al que asistieron miles de personas en todo el país. Los manifestantes protestaron contra el asesinato de líderes sociales y desmovilizados, la corrupción y las reformas laboral, pensional y tributaria del gobierno, y en defensa de los acuerdos de paz y del derecho a la protesta social. La jornada transcurrió con tranquilidad, excepto en Cali donde hubo disturbios y toque de queda. Esa misma noche un “cacerolazo” espontáneo y masivo reso-

nó tanto en los barrios populares como en las zonas residenciales más exclusivas del país.

Las reacciones del presidente y de su partido al paro no fueron muy acertadas. Días antes del 21N, Duque negó públicamente que los proyectos de ley que denunciaban los convocantes se fueran a presentar en el Congreso y, apenas una semana después, la reforma fiscal regresiva propuesta por su ministro fue aprobada en primer debate por las comisiones de Hacienda de ambas cámaras legislativas. Asimismo, el gobierno demoró el diálogo con los convocantes del paro y encaró las protestas mediante la militarización del espacio público, una respuesta similar a la que tuvieron los gobiernos de Ecuador y Chile y el gabinete provisional de Bolivia, que agravó el conflicto en lugar de apaciguarlo.

Las protestas en la calle y los cacerolazos se prolongaron en los días siguientes con dos momentos álgidos: la noche del 22, en la que el gobierno decretó el toque de queda en Bogotá y se vivieron momentos de pánico colectivo por algunos actos vandálicos y la amenaza de asaltos a viviendas y conjuntos residenciales; y la movilizaciones del 23 por la tarde en las que un integrante del ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional) asesinó por la espalda al joven estudiante de 18 años Dylan Cruz. Después de este grave suceso, las marchas continuaron a largo de la siguiente semana (se convocó otro paro el 4 de diciembre), pero fueron poco a poco perdiendo fuerza hasta el 8 de diciembre; ese día, una multitud de personas salió a las calles de Bogotá de forma pacífica para disfrutar del concierto del paro organizado por va-

rios artistas colombianos comprometidos con la causa.

Las protestas contra el gobierno no solo fueron masivas en las calles sino que contaron también con un amplio respaldo de la opinión pública. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría realizada a finales de noviembre recogió que el 71% de los colombianos creía que el paro nacional significaba esperanza para el país. Este dato contrastaba con la escasa aprobación de la gestión del presidente Duque que, según InvaMER, en ese momento era de apenas el 24%. Y lo que es peor, su desaprobación alcanzaba el 70%. Esa misma encuesta desveló además que la aprobación del líder del partido de gobierno, el senador y ex presidente Álvaro Uribe, era la más baja desde que se tienen registros (26%).

Datos como estos hacen pensar que la crisis en Colombia es más política que económica. El país mantiene un crecimiento económico estable, a pesar de sus problemas estructurales de desempleo, precariedad laboral, pobreza y desigualdad. Sin embargo, en menos de año y medio el presidente Duque ha enfrentado varias crisis políticas que lo han puesto contra las cuerdas. En mayo de 2019 el *New York Times* publicó un artículo que evidenciaba la continuidad de los “falsos positivos”, una política aplicada durante el gobierno de Álvaro Uribe que consistió en el secuestro y el homicidio sistemático de jóvenes de barrios marginales para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate. Más recientemente, el pasado 6 de noviembre, Duque recibió la renuncia de su hasta ese momento ministro de Defensa, Guillermo Botero. La dimisión del ministro se produjo después de que

el senador Roy Barreras diera a conocer a la opinión pública que ocho niños entre 12 y 15 años, reclutados de manera forzada por las disidencias de las FARC, fueron asesinados por el Ejército durante una operación militar de bombardeo que tuvo lugar en agosto de 2019. Unos días más tarde, el periodista Guillermo Gómez, de Noticias Uno, entrevistó a los habitantes de una zona rural cercana al lugar del bombardeo, quienes aseguraron que no fueron ocho sino entre 16 y 18 los menores de edad que murieron, y que tres de ellos habrían sido fusilados por las fuerzas militares después de haber escapado del ataque. Estos hechos fueron ocultados por el gobierno y cuando se hicieron públicos durante la moción de censura a Botero, tanto Duque como algunos representantes de su partido mostraron su respaldo al ministro. A todo esto hay que añadir la escasa capacidad que está teniendo el presidente, quizás por su inexperiencia política, para gestionar otros desafíos como la implementación de los acuerdos de paz, el asesinato sistemático de líderes sociales, la inseguridad pública o la crisis diplomática con Venezuela.

Debido a las particularidades del caso, algunos analistas han subrayado la naturaleza excepcional de la situación de Colombia frente a otros países latinoamericanos, pero esta es una verdad a medias. El país andino ha experimentado crisis y ciclos políticos similares al de sus vecinos. La de 2019 no es la primera crisis de representación que sufre el sistema político colombiano, aunque es la primera vez en la ciudadanía exige demandas sociales que van más allá de la sombra del conflicto.

A comienzos de la década de 1990, los grupos armados azotaban duramente al país y sus acciones violentas se cobraban la vida de miles de personas. El conflicto armado se había intensificado a partir de la década de 1980 debido, no solo al incremento del tamaño de las guerrillas, sino al auge del narcotráfico y al surgimiento de los grupos paramilitares. Entre 1987 y 1990 fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales, entre ellos el liberal Luis Carlos Galán, favorito para ganar la presidencia. Pero en medio de este clima de violencia, se produjo un hecho esperanzador. En marzo de 1990 el M-19, uno de los principales grupos insurgentes, abandonaba la lucha armada tras firmar con el gobierno de Virgilio Barco un acuerdo de paz. Al calor de estas negociaciones, surgió un movimiento estudiantil que en las elecciones legislativas y regionales de ese año propuso añadir en las urnas una séptima papeleta en la que se preguntaba a los colombianos si querían reformar la constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente. El proceso fue avalado por los electores y posteriormente por el gobierno de César Gaviria, y culminó con la Constitución de 1991, que instauró un régimen democrático y participativo, reconoció un amplio abanico de derechos fundamentales individuales y sociales, estableció mecanismos constitucionales para garantizar jurisdiccionalmente el cumplimiento de estos derechos, especialmente la acción de tutela, y creó la Corte Constitucional, que desde entonces ha tenido un papel fundamental en el reconocimiento y cumplimiento de los Derechos Humanos en Colombia.

La crisis de 1990 generó un malestar social y desembocó en un nuevo siste-

ma político que muy pronto retomó la dinámica bipartidista característica del siglo xx. En cambio, a finales de 1999, Colombia sufrió una crisis bancaria que hizo que el PIB cayera al 4,2%. Fue el inicio de uno de los periodos más duros de la historia del país. En 1998 el conservador Andrés Pastrana había llegado a la presidencia con la promesa de iniciar un proceso de paz con las FARC, el grupo guerrillero más numeroso, pero las negociaciones fueron un fracaso. La guerrilla aprovechó el despeje militar facilitado por el gobierno para consolidar su autoridad en los territorios que tenía bajo dominio militar. El incremento de la violencia y la inseguridad pública provocó que la opinión pública se decepcionara con los diálogos de paz, y abonó el terreno para la victoria en las siguientes elecciones presidenciales de un candidato, Álvaro Uribe, que apostó por la solución militar al conflicto. La crisis de finales del siglo xx, que comenzó siendo económica, terminó permeada otra vez por las dinámicas del conflicto armado interno.

A comienzos del siglo xx varios académicos comenzaron a referirse a Colombia como un Estado fallido y los ciudadanos vieron en las propuestas de Uribe, un disidente liberal más cercano a los ideales conservadores, una forma diferente de abordar el conflicto. Era la primera vez, desde Belisario Betancur, que un presidente descartaba *a priori* negociar con la insurgencia. A partir de este momento, Uribe se convirtió en la figura central de la política colombiana. Su gobierno enfrentó la crisis de seguridad pública, reduciendo la tasa de homicidios del país y dejó a la insurgencia

aislada socialmente y muy debilitada militarmente. En cambio, el final de su gobierno, no había podido cumplir la promesa electoral de derrotar militarmente a las FARC; por el contrario, estas habían intensificado sus acciones violentas. Asimismo, el estilo personalista de Uribe puso en jaque la fuerte institucionalidad colombiana. En 2005 logró ser el primer presidente en reelegirse tras reformar la Constitución y lo hubiese hecho una tercera vez si la oposición parlamentaria y la Corte Constitucional no lo hubieran impedido. Otras sombras a su gestión fueron los escándalos de corrupción y la connivencia del Estado y de los partidos uribistas con el paramilitarismo. A pesar de estos problemas, al terminar su segundo mandato, la popularidad de Uribe era del 70%. Por ello, en lugar de retirarse, continuó participando activamente en política. De hecho, los dos presidentes que vinieron después que él, Juan Manuel Santos e Iván Duque, contaron con su aval para ganar los comicios, y su rechazo público al proceso de paz con las FARC fue decisivo en la victoria del No en el plebiscito sobre el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Las crisis de representación de 1990 y 1999-2002 en Colombia coincidieron en el tiempo con las de sus pares latinoamericanos, pero mientras que en estos países las crisis respondían a la falta de expectativas de los ciudadanos con sus representantes en materia de derechos y libertades, en Colombia estaban relacionadas con la frustración por la pervivencia del conflicto armado y la violencia.

Hoy Colombia vive una nueva crisis que de nuevo es coetánea a la de sus veci-

nos latinoamericanos. La ola de protestas de 2019 cierra un ciclo político protagonizado por Uribe y sus aliados políticos, y abre una nueva etapa que podría normalizar políticamente al país con relación al conjunto de la región. El pasado 24 de noviembre el ex presidente Juan Manuel Santos no lo pudo expresar mejor en Twitter cuando escribió: “Gracias al acuerdo que se firmó hace 3 años los colombianos pasaron de marchar en contra de secuestros, tomas guerrilleras y minas antipersonal, a marchar por más oportunidades y un mejor futuro. Una paz imperfecta siempre será mejor que una guerra perfecta”.

A MODO DE CONCLUSIÓN: POSIBLES SOLUCIONES A LA CRISIS EN COLOMBIA

La hipótesis de que el origen de las crisis de representación radica en la tensión entre democracia y liberalismo, y más concretamente en la manera en que cada una de estas teorías comprende la representación, parece consecuente en el caso colombiano. Resulta muy atrevido, sobre todo para un extranjero, hacer una lista de posibles soluciones a los problemas del país en el que vive, pero tampoco sería correcto hacer un diagnóstico tan pesimista sin proponer algún remedio a los problemas que se están describiendo. El propósito de estas conclusiones no es presentar un decálogo de soluciones mágicas, sino aportar algunas propuestas político-institucionales que, según los estudiosos de la política comparada, podrían contribuir al menos a atenuar los efectos perversos del círculo vicioso

de la representación en el que permanecen atrapados varios países, incluido Colombia.

El punto de partida es la idea de Norberto Bobbio de que en la actualidad es difícil imaginar una democracia sin liberalismo y un liberalismo sin democracia. A grandes rasgos, hay dos acciones que pueden mitigar los problemas de representación que se han descrito en el presente artículo: respetar las reglas de juego y cuidar el autogobierno del pueblo. La primera de las acciones busca proteger la dimensión liberal de la representación, la segunda, hacer efectiva la dimensión democrática.

Para garantizar que se respeten las reglas de juego se sugieren dos reformas al sistema político colombiano. La primera de ellas consiste en reformar la organización territorial del poder político con el fin de dotar de mayores recursos y autonomía política a los departamentos y municipios. La segunda es incrementar la autonomía y los recursos de los órganos de control del Estado, sobre todo del poder judicial. En diciembre de 2019, en pleno escenario de protestas sociales, se hundió en el Congreso la reforma que cambiaba la forma de elección del fiscal general, haciéndola meritocrática. Proyectos como este podrían favorecer el cumplimiento de las reglas de juego. Asimismo, desde 1991 Colombia cuenta con un poder judicial constitucionalmente muy activo y bastante independiente del gobierno. Si se dotara de mayores recursos a la justicia, esta podría hacer mayor contrapeso a otros poderes del Estado, garantizar efectivamente el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y,

sobre todo, reducir las altas tasas de impunidad en el país.

La segunda acción que podría hacer frente a la crisis de representación actual es cuidar el autogobierno del pueblo. Aquí se proponen dos reformas para enfrentar el problema. Por un lado, fortalecer a los partidos políticos mediante tres cambios legales muy concretos: establecer un sistema electoral con lista cerrada, destinar la financiación pública de las campañas a los partidos en lugar de a los candidatos; y prohibir las candidaturas independientes. Por otro lado, facilitar la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas con medidas tales como acabar con cualquier atisbo de persecución política, establecer el voto obligatorio y rebajar los requisitos legales para poner en práctica los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución.

Estas propuestas, pensadas para Colombia, podrían ser extensibles, con las debidas adaptaciones coyunturales, a otros países que hoy están viviendo escenarios de crisis. Al analizarlos, los politólogos suelen concentrarse en los problemas de la representación liberal y, en consecuencia, proponen reformas encaminadas a salvaguardar las reglas de juego de la democracia. Aquí se plantea además que la tensión entre democracia y liberalismo genera un círculo vicioso que a largo plazo puede deteriorar el sistema democrático y que, para salir de este, la democracia representativa tiene que ser capaz de hacer efectivo uno de sus principios básicos, quizás el más antiguo de todos, que el pueblo se gobierne a sí mismo.

JOSÉ MANUEL RIVAS OTERO

El año 2019 no fue un año más en la agenda política latinoamericana. Durante su segundo semestre se produjeron diversos estallidos sociales en Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Colombia. A eso se sumó la continuidad de la inestabilidad social, política e institucional en Venezuela, y las tensiones sociales en Brasil a partir de un plan de ajuste importante impulsado por el gobierno de Jair Bolsonaro. En una parte del mundo donde inestabilidad fue la palabra más usada los últimos meses, Argentina se lanzó a un proceso electoral que comenzó en febrero del 2019 y que rediscutió todo el sistema político. Mientras todos sus vecinos sintieron tambalear las bases de órganos públicos y poderes constituidos, la Argentina reforzó su confianza en un sistema institucional que tuvo como principal trabajo procesar el conflicto político entre sus principales actores.

Como ocurre cada cuatro años, los ciudadanos argentinos decidieron sobre gobernadores provinciales, Congreso Nacional y la Presidencia de la Nación. Este calendario de competencia electoral comenzó con distintas elecciones provinciales por una particularidad propia que distingue la dinámica política argentina: los gobernadores tienen autonomía electoral y por tanto la posibilidad de desdoblar sus elecciones respecto de la elección nacional. Esta decisión estratégica convirtió la carrera por la titularidad de la Casa Rosada en una maratón con postas, trayectos y momentos que sirvieron de termómetro general para su tramo final: las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)

de agosto y las elecciones generales de octubre.

En este artículo queremos resaltar los principales aspectos del largo proceso electoral argentino, destacando actores, estrategias y discursos, al igual que analizando los principales resultados de las elecciones nacionales y provinciales. Sobre el final sintetizamos las principales conclusiones.

LAS REGLAS DE LA COMPETENCIA ELECTORAL

Argentina tiene un sistema electoral nacional particular de dos tiempos con posibilidad de un tercero. Cada uno de esos tiempos tiene un esquema legal específico: elecciones primarias en agosto, generales en octubre y balotaje en noviembre.

En las PASO los ciudadanos eligen quienes van a competir por los cargos en representación de cada partido político o coalición. Como son abiertas, todos los electores habilitados para sufragar en una elección pueden votar en las primarias, independientemente de si están o no afiliados a alguna agrupación. Este proceso es, además, simultáneo para todos los partidos: en un mismo día todos definen candidaturas. Y es obligatorio tanto para los partidos o coaliciones (quien no va a las primarias no puede competir después) como para los ciudadanos. A estos componentes se suman dos adicionales: 1) los partidos o coaliciones que participen deben al-

canzar un mínimo de 1,5% de los votos válidos emitidos (positivos y en blanco) para competir en las elecciones generales; 2) la elección interna de la fórmula presidencial es completa, dado que los partidos y coaliciones que compiten deben presentar a la primaria la fórmula indivisible de presidente y vice.

Quienes superan las PASO compiten en el segundo tiempo, la elección general. El titular del Poder Ejecutivo nacional se elige por un sistema de mayoría absoluta atenuada: resulta electa la fórmula que alcanza el 45% de los votos, o bien el 40% y 10 puntos de diferencia respecto del segundo. En el caso de que no se den ninguna de estas dos condiciones, se celebra un balotaje. Además, se eligen conjuntamente los diputados nacionales de las 24 provincias por fórmula D'Hont con magnitudes variables que van desde 3 hasta 35, y un tercio de los senadores por asignación mayoritaria por lista incompleta (2 bancas para el primero y la restante para el segundo) con magnitud 3 en todos los distritos.

NOTAS BREVES SOBRE EL ESCENARIO DE CAMPAÑA

El primer semestre del 2019 el proceso electoral estuvo caracterizado por dos elementos importantes. Primero, una serie de elecciones provinciales para gobernador que fueron generando el clima de disputa electoral para las elecciones nacionales de agosto y octubre. Segundo, y en cierta medida influenciado por el primero, la definición de los candidatos a los principales cargos públicos por parte de los partidos o coaliciones.

Este segundo elemento tuvo una particularidad: en las tres fórmulas presidenciales principales hubo, al menos, un candidato identificado como peronista. El Frente de Todos, principal coalición opositora, sintetizó la mayoría de los partidos políticos, líneas internas y agrupaciones del Peronismo, marcando un cimbronazo político en mayo cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura a vicepresidente, detrás de Alberto Fernández, ex jefe de gabinete suyo (2008) y de Néstor Kirchner (2003-2007). Como reacción a ese movimiento estratégico, Mauricio Macri, presidente en funciones, designó como su compañero de fórmula al senador peronista Miguel Ángel Pichetto. En tercer lugar Roberto Lavagna acordó con Juan Manuel Urtubey (gobernador peronista de la noroesteña provincia de Salta) y sumó a su coalición Consenso Federal a peronistas, socialistas, progresistas e independientes.

Más relegadas quedaron siete coaliciones. Por un lado, dos candidaturas de izquierda: el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, liderado por Nicolás Del Caño, y el Movimiento al Socialismo, por Manuela Castañeira. En la derecha del espectro ideológico los conservadores de NOS, con Ricardo Gómez Centurión, y UNITE, con el mediático economista liberal José Luis Espert. Más hacia ese extremo se presentó el Frente Patriota, con un discurso muy nacionalista marcado por Alejandro Biondini. En el centro, dos candidaturas con menor peso electoral y político: Raúl Albaracín (Movimiento de Acción Vecinal) y José Romero Feris (PAN). Estas últimas tres, junto con el MAS, no pasaron el umbral de las PASO.

Definidas las candidaturas, cada una de ellas se posicionó en el espectro ideológico con una particularidad: un realineamiento del sistema político argentino en su dimensión económica izquierda-derecha. En el medio de una nueva grave crisis económica en la Argentina, las candidaturas tomaron postura sobre qué tipo de políticas eran necesarias para capear una crisis que todos los indicadores muestran grave y sin horizonte de resolución. Aquí, la disputa de propuestas fue si las políticas públicas debieran estar orientadas a sostener y reactivar el costado de la oferta o de la demanda.

Juntos por el Cambio se encontró dentro de la trampa de los oficialismos: más allá de sus propuestas a futuro, los electores lo evaluaron por una gestión económica muy cuestionada. Dado este escenario, en este primer tiempo la campaña del oficialismo pivoteó entre las propuestas sobre la necesidad de primero estabilizar las variables macroeconómicas para luego disfrutar de los beneficios del consumo, y el intento de llevar la discusión hacia un campo simbólico de populismo vs. república. Sin embargo, los principales indicadores económicos adelantaron una profundización de la crisis en el futuro inmediato, lo que contribuyó a un escepticismo ciudadano sobre su capacidad de gestionar la crisis.

Por su parte el Frente de Todos fue sumando apoyos de los sectores del trabajo informal, la producción nacional y los sindicatos, respaldos fundamentales frente a la conflictividad social. A esta amplia coalición de apoyo se añadieron gobernadores peronistas (la mayoría vic-

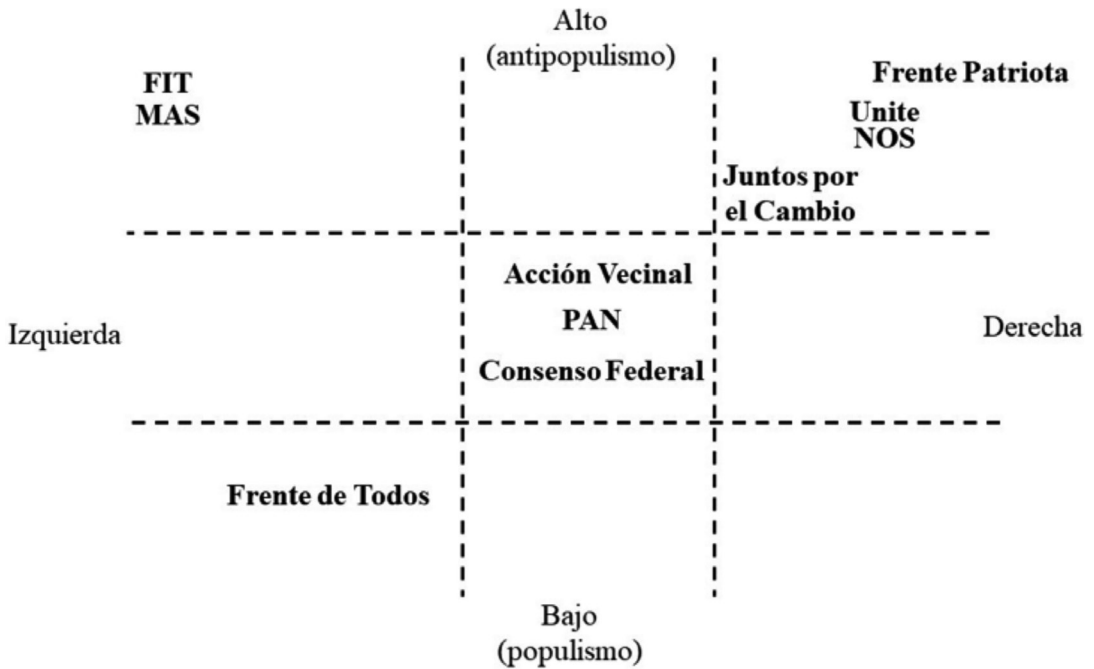
toriosos en el primer semestre del 2019), cuyo apoyo político resultó clave en su proceso de construcción y consolidación. Sobre esta base política se posicionó, frente al electorado, como el principal actor con capacidad para redistribuir el ingreso, aliviar la presión económica y contenerla para los sectores más vulnerables, proponiendo medidas de reactivación económica que comenzaran por apuntalar el consumo recuperando el salario.

Este realineamiento en izquierda-derecha también se dio en la dimensión social. Mientras al principio de la campaña los sectores más progresistas de Juntos por el Cambio tenían un lugar relevante, luego de los resultados de las PASO su discurso y protagonistas comenzaron a virar hacia referentes y temas más vinculados a los sectores conservadores: seguridad, defensa de las dos vidas, control de la protesta social, populismo vs. república. Este viraje apuntó directamente a disputar el apoyo electoral de UNITE y NOS que, si bien se presentó magro en términos de poder disputar la presidencia, mostró un drenaje de votos de Juntos por el Cambio hacia estas fuerzas. De este modo el Frente de Todos acaparó el discurso progresista y a sus referentes, quedando en esta dimensión en el cuadrante izquierdo que solo podría disputarle el FIT.

El escenario descrito contribuyó a generar las condiciones para una polarización entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, lo que dejó a Roberto Lavagna preso de esa disputa. Tanto su coalición Consenso Federal como el resto de los competidores orientaron su estrategia electoral a superar el límite legal de las primarias para poder competir en

octubre y, posteriormente, a sumar diputados nacionales en los distritos más grandes.

Podemos sintetizar la carrera presidencial argentina del año 2019 en el siguiente esquema.



Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de Pierre Ostiguy sobre la identidad política argentina.

LA PREVIA DE OCTUBRE: LAS ELECCIONES PROVINCIALES EN 2019

La maratón electoral comenzó en febrero con primarias provinciales celebradas en la provincia de La Pampa. Ese partido dio el puntapié para un calendario electoral mayormente desdoblado, solo igualado por las elecciones del año 2003 cuando cuatro provincias coincidieron con la elección presidencial. A eso se sumó que algunos distritos contemplan en su legislación electoral la celebración de primarias o internas bajo distintos sistemas.

La disputa por las gobernaciones tuvo dos particularidades. Primero, las distintas elecciones confirmaron una mayoría peronista en gran parte del territorio nacional y una derrota de los candidatos identificados con Juntos por el Cambio. Esto colaboró en la generación simbólica del clima victorioso para el Frente de Todos en agosto y octubre. Segundo, una tendencia hacia la reelección de los oficialismos provinciales (véase gráfico en p. 229): tan solo la provincia de Santa Fe cambió de color político (en Río Negro JSRN es una continuación del FG).

Provincia	Primarias	Gobernador	Legislativas
Buenos Aires	11 de agosto		27 de octubre
Catamarca	11 de agosto		27 de octubre
Chaco			13 de octubre
Chubut	7 de abril		9 de junio
CABA	11 de agosto		27 de octubre
Córdoba			12 de mayo
Corrientes		<i>No eligió</i>	2 de junio
Entre Ríos	14 de abril		9 de junio
Formosa			16 de junio
Jujuy			9 de junio
La Pampa	17 de febrero		19 de mayo
La Rioja			27 de octubre
Mendoza	9 de junio		29 de septiembre
Misiones			2 de junio
Neuquén			10 de marzo
Río Negro			7 de abril
Salta	6 de octubre		10 de noviembre
San Juan	31 de marzo		2 de junio
San Luis			16 de junio
Santa Cruz			11 de agosto
Santa Fe	28 de abril		16 de junio
Santiago del Estero		<i>No eligió</i>	
Tierra del Fuego			16 de junio
Tucumán			9 de junio

Fuente: elaboración propia.

EL FINAL DE LA MARATÓN

Con todos los cañones apuntados por oficialistas y opositores a las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre, el clima electoral comenzó a agitarse en los meses de junio y julio. Cabe agregar que para la elección presidencial ninguna de las 10 coaliciones

tuvo competencia interna, motivo por el cual, y a raíz de la regla de obligatoriedad mencionada anteriormente, las primarias se convirtieron en un termómetro para capturar las preferencias de la ciudadanía. Las PASO arrojaron una victoria para el Frente de Todos con el 47% de los votos, un segundo lugar para Juntos por el Cambio con el 31% y más

Provincia	1983-1987	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019	2019-2023
Nación	UCR	PJ	PJ	PJ	UCR	PJ	PJ	PJ	PRO	PJ
Buenos Aires	UCR	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PRO	PRO
Córdoba	UCR	UCR	UCR	UCR	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Santa Fe	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PS	PS	PS	PJ
CABA				UCR	FREPASO	FREPASO	PRO	PRO	PRO	PRO
Mendoza	UCR	PJ	PJ	PJ	UCR	UCR	PJ	PJ	UCR	UCR
Tucumán	PJ	PJ	PJ	FR	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Entre Ríos	UCR	PJ	PJ	PJ	UCR	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Salta	PJ	PJ	PRS	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Misiones	UCR	PJ	PJ	PJ	PJ	FRC	FRC	FRC	FRC	FRC
Chaco	PJ	PJ	PACH	UCR	UCR	UCR	PJ	PJ	PJ	PJ
Corrientes	PAL	PAL	PAL	iF/PAL/PN					if/UCR/UCR/UCR	
Santiago del Estero	PJ	PJ	PJ/if	PJ	PJ	PJ/if/UCR			FCS	
San Juan	PBSJ	PBSJ	PJ	PJ	CR/PBSJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Jujuy	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	UCR	UCR
Río Negro	UCR	UCR	UCR	UCR	UCR	UCR	UCR	PJ/FG	FG	JSRN
Neuquén	MPN	MPN	MPN	MPN	MPN	MPN	MPN	MPN	MPN	MPN
Formosa	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Chubut	UCR	PJ	UCR	UCR	UCR	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
San Luis	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Catamarca	PJ	PJ	UCR	UCR	UCR	UCR	UCR	PJ	PJ	PJ
La Rioja	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
La Pampa	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Santa Cruz	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ
Tierra del Fuego			MPF	MPF	PJ	UCR	ARI	PSP	PJ	PJ

Fuente: elaboración propia. Referencias: if = intervención federal Azul = PJ/ Peronismo / Rojo = UCR / Amarillo = PRO / Rosa = PS / Celeste = FG/FREPASO / Naranja = ARI / Verde = Partidos/Coaliciones Provinciales.

relegado a la tercera posición Consenso Federal con el 8%.

Este escenario llevó a un giro de 180 grados de parte del oficialismo nacional en propuestas y discurso. Se impulsaron una serie de medidas destinadas a incidir positivamente en el bolsillo de la ciudadanía y a moderar el impacto de la creciente crisis económica. Mauricio Macri modificó su gabinete y marcó una reorientación de algunas políticas, que sin embargo los electores percibieron como tardío. A esto se sumó que los principales indicadores económicos avanzaron en una profundización de la crisis contribuyendo al escepticismo ciudadano creciente. Así, sus candidatos y principales dirigentes radicalizaron su discurso en pos de capturar el voto que se había mermado por derecha. Por su parte, el Frente de Todos se concentró en consolidar la coalición electoral y en transmitir un mensaje de unidad y

homogeneidad interna bien marcado, reforzando su discurso progresista en lo social y económico.

En octubre el resultado electoral confirmó un secreto a voces y presentó una sorpresa. El primero: la victoria electoral del Frente de Todos en primera vuelta. El Peronismo volvió a conquistar al Casa Rosada con el 48% de los votos, sin necesidad de recurrir al balotaje. El segundo: un recupero de alrededor de dos millones de votos de Juntos por el Cambio que le permitió llegar al 40%. Si bien esto fue llamativo para analistas, periodistas y el público en general, repitió el mismo patrón que el proceso electoral de 2015, aunque no alcanzó para lograr la Presidencia.

Finalmente, se dio un importante proceso de concentración del voto. Si tomamos en cuenta el Número Efectivo de Partidos (NEP) podemos ver cómo en los

NEP presidencial desagregado por provincias. Argentina, 1983-2019.



últimos años el sistema partidario argentino se ha dirigido paulatinamente hacia indicadores similares a los de la década del ochenta, salvo que el voto ya no se concentra en partidos políticos nacionales sino en coaliciones nacionales multinivel. Se abre un interrogante sobre la estabilidad de este bicoalicionismo: podemos estar siendo testigo de la consolidación de una coalición peronista (Frente de Todos) y una coalición no peronista (Juntos por el Cambio).

CONCLUSIONES TENTATIVAS SOBRE LA ISLA ELECTORAL

Tal como mencionamos el 2019 no fue uno más en la región. Tanto por los conflictos sociales, económicos, políticos e institucionales mencionados, como por un hito en la historia argentina. Esto es, la primera alternancia entre un candidato peronista y un *incumbent* no peronista sin necesidad de anticipar el traspaso de mando. Sin dudas fue una muestra de institucionalidad y compromiso demo-

crático de parte de todos los actores del sistema político.

Para el próximo mandato presidencial la responsabilidad será del Frente de Todos, una coalición electoral que logró reunir a distintas voluntades y organizaciones que se habían enfrentado en disputas internas en los últimos ocho años. Dependerá de las cualidades de Alberto Fernández, de la convivencia con Cristina Fernández de Kirchner y de la posibilidad de que en la coalición se respeten reglas internas, espacios de poder y recursos propios. El desafío que tiene por delante el nuevo gobierno es encauzar la economía y salir en el mediano plazo de las crisis recurrentes. Si la apuesta fue por fortalecer el costado de la oferta, entonces su base electoral estará ansiosa de resultados.

El Frente de Todos tiene el mandato de cumplir con su propuesta electoral de redistribuir el ingreso para aliviar la presión económica y contenerla para los sectores más vulnerables, reforzando su discurso progresista en lo social. Estas propuestas son las que tienen mayor eco en las provincias metropolitanas, suman-

do a esta gran coalición a la mayoría de los gobernadores de provincias periféricas y más chicas. El límite aquí será, como toda gran coalición que se enfrenta a un contexto de restricción externa como el que actualmente atraviesa la Argentina, que no todos los integrantes verán satisfechas sus demandas al mismo tiempo, a lo que se suma un contexto regional de protesta social de las clases medias.

Gestionar las demandas de todos los sectores que la apoyan será el punto central

a observar en la coalición peronista actual. Lo positivo es que, mientras en la región esta disputa entre dos modelos sociales y de crecimiento económico se da en las calles, los argentinos la han resuelto (por el momento) en las urnas y los actores políticos han apostado a las instituciones democráticas como camino para su resolución. Viendo la historia argentina reciente, este es el mayor logro de nuestra democracia.

LARA GOYBURU / FACUNDO CRUZ

ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES SOBRE EL COLAPSO DEL VERGEL CHILENO

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible” (Sebastián Piñera, 2019).

Con estas palabras se presentaba ante el país la noche del 21 de octubre de 2019 el presidente Sebastián Piñera. Flanqueado por el ministro de Defensa y por el comandante en jefe del Ejército, ataviado por cierto con uniforme de combate, hablaba ante un Chile que ya llevaba dos días bajo estado de excepción y toque de queda. Se trata de un presidente democráticamente electo acompañado de un militar y enarbolando el discurso del enemigo interno, tan recurrido en los años del autoritarismo latinoamericano de la segunda mitad del siglo xx. Desde que Piñera declaró una guerra imaginaria, contra un enemigo imaginario, desde el gobierno se

ha buscado incansablemente antagonista: comunistas, frenteamplistas, narcotraficantes, anarquistas o barras bravas de fútbol. Un caleidoscopio de enemigos internos antisistema, en la obcecada búsqueda de un enemigo interno sobre el cual construir su maniqueo y falaz discurso de buenos y malos; paz versus violencia.

En este sentido, el ejército en la calle no solo representó una inexcusable afrenta a los miles que sufrieron la abyecta dictadura de Pinochet, sino que además sirvió de combustible catalizador para que unos días después, pese a la violencia y la represión, se consumara la jornada de protesta más grande que recuerde la historia del país. Únicamente en la capital se congregaron cerca de un millón y medio de personas, mientras que en el resto del país otros tantos cientos de miles bajo las consignas de “Chile despertó” y “No estamos en Guerra”, inundaban las calles.

Solo unos días antes del estallido social de octubre, el mismo presidente ha-

bía calificado a Chile como un oasis en el continente, remitiendo al mantra post dictatorial del excepcionalismo chileno, que supuestamente caracterizaba a un país con un sistema económico eficiente que había reducido la pobreza y era capaz de mostrar orgulloso indicadores macroeconómicos sanos, una transición modélica, ejemplo a seguir, y una de las democracias de mayor calidad a nivel continental. En definitiva, uno de los países más estables de la región, donde “las instituciones funcionan”, como le gustaba repetir incansablemente al ex presidente Ricardo Lagos. Es este “mito” de estabilidad democrática el que estalla dejando al descubierto las miserias de un sistema neoliberal de arrastre que arrasa y mercantiliza todo, donde derechos sociales se han convertido en bienes de consumo, donde el agua potable es privada o la vejez y la jubilación constituyen una condena a la pobreza. Se podría argumentar que es casi unánime, con matices claro, que detrás de este estallido se encuentra esta endémica desigualdad cultivada en las últimas décadas. Es decir, existen profundas causas estructurales que podrían intentar explicar los abusos que sustentan el desencanto, la frustración, la furia y la indignación que han impulsado las movilizaciones. No obstante, nuestro objetivo es mucho más acotado: lo que se pretende es plantear algunas reflexiones preliminares a partir de lo acaecido y observado en el último mes y medio.

LA REPRESIÓN COMO ÚNICA RESPUESTA

La transición se caracterizó en un comienzo por su fragilidad, el pacto funda-

cional fue desnudado en su fragilidad por parte de los militares en dos ocasiones, los llamados ejercicio de enlace y boinazo en los cuales la supeditación de las fuerzas armadas al poder civil quedó en entredicho, materializándose mediante la coerción lo intransable de la impunidad. Verdad, justicia y reparación se fundieron inevitablemente en la consabida “justicia en la medida de lo posible” del ex presidente Aylwin. Miles de casos de violaciones a los derechos humanos quedaron impunes, la transición se construyó sobre un manto de impunidad que agenció el “¡Nunca más!”, pero en la práctica priorizó la reparación simbólica por sobre la justicia y la verdad. ¿Qué tiene que ver esto con el estallido social de 2019?

La transición pactó cambios y continuidades, gatopardismo o enclaves autoritarios se les llamó desde la literatura académica. Los gobiernos de la transición se sucedieron, empero en lo esencial el modelo permaneció inalterado, siendo la impunidad la norma. Es este sistema que se asentó en la violencia e impunidad, manifestado en una sociedad con profundas divisiones de clase, raza y género, y una desigualdad estructural ineludible, el que hoy se ve interpelado desde las calles. Pese a que este cuestionamiento, es posible argüir, representa una continuidad en cuanto a ciclos de protesta que se han sucedido en Chile en la última década, teniendo su expresión más acabada con la movilización de estudiantes de 2011, pero que ha incluido demandas regionalistas, ecologistas, indígenas, feministas, por pensiones dignas, entre otras.

Lo cierto es que desde el poder no se ha sabido cómo reaccionar ante el desborde social: el gobierno demostrando su

ineptitud, la totalidad de la elite política expresando su desorientación, y la clase dominante su histórico clasismo. El sistema en su conjunto no sabe cómo reaccionar y responde de manera atávica, como sabe hacerlo, como siempre lo ha hecho, recurriendo a la violencia, la criminalización y estigmatización del “enemigo”. Lo anterior resulta preocupante toda vez que, pese a que Carabineros ha sido el protagonista de la violencia, el Ejército en los días de estado de excepción no dudó en volver las armas hacia los chilenos otra vez, ejerciendo ambas instituciones, una violencia que no se había visto recientemente en el país y se pensaba cosa del pasado. Al menos para el general de los chilenos, pues son ya décadas en que las comunidades mapuche en el sur vienen denunciando la militarización, criminalización, racismo y violaciones a sus derechos humanos que cuentan con un lamentable saldo de muertos y presos mapuche.

La crisis actual tiene su luctuoso correlato empírico en las cifras resultado de la violencia estatal. Hasta comienzos de diciembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportaba 25 muertos, 352 personas con daños oculares producto de los disparos de Carabineros, 3.449 heridos, 544 acciones judiciales por torturas y 108 por violencia sexual. Esta masiva violación a los derechos humanos en el país ha sido refrendada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. Todos los cuales han sido negados o cuestionados por parte del gobierno, además de respaldar incondicionalmente el actuar de la policía.

El Estado continúa, tal cual lo hizo, protegiendo a los victimarios en desmedro de las víctimas. Así, se perpetúa la rabia, la impotencia y la impunidad. Se concreta de este modo una aporía en donde el Estado, por un lado, no puede evitar que se conozcan en cierta medida las violaciones a los derechos humanos que acontecen en el país, cumpliendo la ciudadanía y las redes sociales un rol fundamental en esto, mientras que de manera paralela oculta y desinforma, negando de manera regular al país y a la comunidad internacional, que en Chile ocurre cualquier tipo de atropello o abuso. Es paradójica, pero también *continuum*, pues es la forma en la cual sabe reaccionar para proteger el *statu quo*.

CHILE DESPERTÓ O “CABROS, ESTO NO PRENDIÓ”

La metáfora de despertar es engañosa. Es cierto que la masividad, duración (63 días al momento de escribir esta reflexión) y extensión territorial de las movilizaciones son difíciles de encontrar en la historia del país, y sin lugar a dudas desde la transición. Sin embargo, plantear asombro o sorpresa por lo sucedido, como han sostenido algunos, es tan pueril como desconocer que este estallido no emerge desde una vacuidad, muy por el contrario, responde o encuentra sus raíces mnemónicas profundamente arraigadas en la experiencia política popular. Responde a un aprendizaje y acumulación de experiencia, tanto de éxitos como de fracasos anteriores en términos organizativos, discursivos y en cuanto a repertorios de actuación colectiva. Aunque parezca ite-

rativo, parafraseando a Tilly, las formas de acción colectiva no surgen de la nada, se aprenden en la lucha misma. Este estallido social es la concreción de ciclos de protestas anteriores, aunando y amplificando demandas que han sido sistemáticamente postergadas por el Estado.

Todo comenzó hace casi dos meses de manera aparentemente espontánea inicialmente, con actos de desobediencia civil por parte de estudiantes secundarios que saltaban los torniquetes del Metro de Santiago, en protesta por el alza en el pasaje. Luego de 3 días de evasiones masivas convocadas por los estudiantes, un ex director del Metro, de manera paternalista planteaba en una entrevista televisiva “cabros, esto no prendió (...) No se han ganado el apoyo de la población. (...) El chileno es bastante más civilizado.” Dos días después estallaría la crisis con una escalada de manifestaciones, violencia e incendios de estaciones de metro derivando en la mayor muestra de descontento post transición. Algunas características preliminares posibles de observar tienen que ver con la inexistencia, al menos en un comienzo, de una organización, demanda o liderazgo claro, siendo además evidente la alienación de los partidos políticos con respecto al pueblo que, supuestamente, representan. No solo sin ser capaces de dar una respuesta clara a lo que estaba y está pasando, en ocasiones denostados y encarados por manifestantes, además de llevar a cabo acciones y emitir declaraciones, tanto desde el gobierno como desde el Congreso, que no han hecho más que aumentar la distancia con la ciudadanía. Muestra clara de esta desafección es el proceso de desarticulación que ha sufrido el Frente Amplio, coalición de izquierda

con miembros muchos de los cuales provienen de los movimientos estudiantiles, pero que no han logrado evitar que el gobierno imponga su agenda de criminalización de la protesta, ganándose de esta forma el repudio de muchas de sus bases.

Sin embargo, pese a las muchas críticas que se puede hacer al respecto, por el momento el único camino institucional para intentar salir de esta crisis ha surgido de un acuerdo entre los partidos en el Congreso. Esto significa que se han sentado las bases para la realización de un plebiscito que dirima si el país quiere o no una nueva constitución política y si esta será realizada por una convención constituyente –que estaría integrada por representantes ciudadanos– o una convención mixta, compuesta por un 50% de constituyentes elegidos, y otro 50% por parlamentarios. Es un acuerdo débil, y por el momento no se sabe que sucederá, especialmente debido a que no hay consenso en cuestiones relacionadas con paridad de género, cupos reservados para pueblos indígenas o, la forma en que candidatos independientes que no sean militantes de partidos políticos puedan participar y lograr representación en esta convención.

Otra característica que ha llamado la atención, por sobre todo mediática y del gobierno, ha sido la existencia de violencia. Más allá del manido recurso de estigmatizar toda protesta de violenta, lo cierto es que sí ha habido niveles de violencia inusitados para el general de la población. Esto es fundamental, pues violencia siempre ha habido. Violencia de clase, de género, racial. Ha habido violencia contra inmobiliario público y privado, han existido saqueos y también contra-violencia o autodefensa de algunos manifestantes frente

al actuar desproporcionado de la policía. Empero, nada, absolutamente nada justifica el nivel de violencia y represión criminales que se ha ejercido desde el Estado y que ya se han mencionado. En concreto, la violencia tampoco surge desde el vacío, más allá de la presencia de grupos delictuales que aprovechan de actuar, es posible argüir que la violencia o contra-violencia es expresión de las contradicciones del sistema, o como plantean los politólogos Sergio Toro y Macarena Valenzuela “es producto de un tipo de sociedad que se rebela de manera explosiva y desarticulada ante un tipo de violencia particular inducido por el modelo subsidiario que actuó de manera silenciosa, poco perceptible, pero con efectos altamente corrosivos del tejido social del país”.

Por último, pero no menos interesante, resulta que esta rabia se ha manifestado como ha solido suceder durante los últimos lustros, contra las instituciones políticas, contra el poder, contra los partidos y lo políticos, contra la iglesia. Sin embargo, ha ido más allá, expresándose simbólicamente sobre los íconos alrededor de los cuales la clase dominante ha ido construyendo su relato país, destruyéndose en distintas ciudades del país las estatuas de figuras del pasado militar u otras como Cristóbal Colón, Pedro de Valdivia, Teodoro Schmidt, o José Menéndez, ligados a la violencia colonial. Pero esta expresión revisionista e iconoclasta, viene preñada de símbolos alternativos, muchos surgidos de la lucha callejera misma y expresión de la creatividad como forma de resistencia. Y otros que han sido resignificados al calor de la protesta, así vemos cómo la bandera mapuche flamea altiva en cada manifestación, o que las letras de

canciones como “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara o “El baile de los que sobran” de Los Prisioneros son coreadas a manera de himnos antiviolencia y antisistema al mismo tiempo por los manifestantes. Asimismo, “El pueblo unido jamás será vencido”, de la época de la Unidad Popular, ha resurgido con fuerza en una especie de continuidad intergeneracional e histórica.

La impotencia ante el abuso y la desigualdad dio paso a la rabia. En las calles hubo violencia, sin duda, o contra-violencia y autodefensa si queremos, pero por, sobre todo, y esto parece relevante, foros, actos artísticos, alegría, esperanza, solidaridad y muchas expresiones de política no convencional cuyo correlato más concreto e interesante ha sido probablemente la miríada de cabildos auto-convocados que han emergido por todo el país discutiendo acerca de la necesidad de construir un nuevo país y una nueva constitución, en definitiva, haciendo política. La solidaridad, la auto-organización, la creatividad y la memoria como respuesta a la violencia intrínseca del modelo y la represión desproporcionada del gobierno.

REFLEXIONES FINALES

La democracia chilena está en una coyuntura crítica, la gente se volcó a las calles cansada por la desigualdad, los abusos, las injusticias, en definitiva, contra un sistema del cual no se siente parte. La ruta constituyente parece por ahora el resultado más relevante de las movilizaciones, pese a no estar exento de críticas. Se presenta como una oportunidad única para que se pueda reemplazar

por fin la constitución elaborada por la dictadura cívico militar que, pese a cambios cosméticos, entre ellas estar firmada ahora por Ricardo Lagos y no Pinochet, sigue en esencia siendo la misma. De esta forma podrá comenzar a dejarse atrás un legado de desigualdad que tiene hoy al país dividido entre una minoría de ricos y una mayoría que ha experimentado el abuso constante por no tener derecho a la salud, a la educación, a pensiones dignas. Viviendo, además, la incertidumbre de un gobierno con características cada vez más autoritarias y sin mecanismos institucionales eficientes para enfrentarlo.

No podemos finalizar sin hacer énfasis en la innegable importancia y centralidad que han tenido en este contexto “la calle” y organizaciones de la sociedad civil, feministas, LGTBI, mapuche, estudiantes, ecologistas, de deudores, y un largo etc. Estas organizaciones junto al apoyo de miles de ciudadanos chilenos desde la calle no pueden ser excluidas de este proceso constituyente, que debe ser capaz de garantizar paridad, curules reservados para indígenas y algún mecanismo efectivo de representación para quienes no forman parte de partidos políticos.

VÍCTOR TRICOT

K'ARAS VS T'ARAS: EL USO DEL CLIVAJE ÉTNICO EN LA DISPUTA POR EL PODER EN BOLIVIA

“¿Quién se cansa? Nadie se cansa. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde” fue el estribillo que se escuchaba en las movilizaciones y los puntos de bloqueo que paralizaron Bolivia durante 21 días tras los resultados de las elecciones nacionales. La movilización ciudadana “Generación de las ‘piti-tas” —apelativo utilizado por los manifestantes porque utilizaban una sogá/cordón para bloquear las calles— capitalizó el descontento de la clase media urbana, debido a los múltiples casos de corrupción en los que se vieron implicados varios representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) e incluso militares y policías, la desinstitucionalización de los órganos judicial y electoral, el despilfarro económico que percibía la ciudadanía o la pérdida paulatina de los derechos de organizaciones sociales disidentes al MAS, medios de

comunicación y políticos de oposición, así como la inacción del gobierno durante el incendio en la Chiquitania, en el que se perdieron alrededor de 500 mil hectáreas. Estos acontecimientos acumulativos de desgaste de la gestión gubernamental se enfrentaban a una estabilidad macroeconómica nunca antes vista en Bolivia. Toda una paradoja.

Sin embargo, la movilización de octubre fue una respuesta a la incertidumbre generada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las denuncias de irregularidades cometidas en los comicios presidenciales y, principalmente, por la abrupta interrupción en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al 83,79 por ciento del recuento, los cuales posibilitaban una segunda vuelta entre Morales (45,28 %) y Carlos

Mesa (38,26%), candidato de Comunidad Ciudadana. Su discurso era básico: el respeto al voto, que se tradujo posteriormente en la recuperación de los valores democráticos y fue capitalizado por una parte de la élite político y cívico-conservadora para recuperar el espacio político y de poder que habían perdido durante esta última década.

El gobierno acusaba a la oposición política de racismo al desconocer el voto del área rural. Para el MAS, el 14% de la votación faltante le pertenecía al movimiento indígena y con ello les daba una victoria en la primera vuelta. Durante las primeras semanas del conflicto, Evo, en los encuentros con sus militantes o sus visitas al área rural, les pedía que defendan al “proceso de cambio” de un golpe de Estado y de los “racistas” y “vendepatrias”. Para ello, convocó a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), conformada por las organizaciones sociales afines al proceso de cambio y advertía un cerco a las ciudades sino deponían las movilizaciones, medida que los movimientos indígenas utilizaron para impedir el ingreso de alimentos y combustible en otras históricas movilizaciones.

Los episodios de agresiones entre militantes del MAS y la “Generación de las pititas” en las calles eran continuos, mientras la Policía no intervenía o se veía sobrepasada. Uno de los sucesos más trágicos ocurrió en Cochabamba entre los campesinos del Chapare y la “Resistencia Juvenil Cochala” –grupo que se había conformado luego del destrozo de varias viviendas de la ciudad durante las manifestaciones de los militantes del MAS–, donde murió un joven de la “resistencia” y la alcaldesa de Vinto, perteneciente al

MAS, fue humillada y ultrajada por un grupo de movilizados.

Mientras la confrontación entre bolivianos se incrementaba en las calles, a través de las redes sociales se alimentaba el discurso de odio y del miedo al “otro”. Bolivia, al ser una sociedad estructuralmente racista y clasista, comenzaba a definir a través del color de la piel y los rasgos físicos quién era el enemigo, resurgiendo la división entre los *k'aras* y los *t'aras* (palabras aimaras utilizadas de forma despectiva, la primera en relación a los blancos y la segunda en relación a los indígenas). En medio de esto, emergió el discurso regionalista en Santa Cruz y La Paz. Los cruceños no eran bienvenidos en la sede de Gobierno, más cuando el líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Camacho, pedía la renuncia de Morales, todo ello sumado a la existencia de muchas denuncias de amedrentamiento a los migrantes del occidente que vivían en el oriente.

La dimisión de Evo Morales y varias autoridades del gobierno no frenaron el caos social. Las siguientes 48 horas, el discurso del miedo y del odio al “otro” se propagaba por las redes sociales y se construía de ambos lados, y el fenotipo se comenzaba a imponer: aquellos con rasgos indígenas serían tildados de masistas y aquellos mestizos-blancos de opositores al proceso de cambio, aunque distaran sus posiciones políticas e ideológicas de lo que proyectaba su color de piel. Un ejemplo claro fue La Paz, cuando el rumor de que cientos de campesinos cercarían y tomarían las ciudades se hacía más clamoroso. Con los policías amotinados, los vecinos resguardaban sus hogares y sus barrios. La Paz aguardaba silente a que

los campesinos bajen desde El Alto con el anuncio de la “guerra civil” y tomen la ciudad. Nada de eso sucedió finalmente.

Si bien el debate está centrado, actualmente, en si los acontecimientos de octubre-noviembre fueron o no un golpe de Estado, hubo fraude electoral o no, en esta breve reflexión nos remitimos a abordar el uso del racismo y el miedo con fines políticos y la instrumentalización de lo étnico.

LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LO ÉTNICO EN EL PODER

Bolivia enfrentó muchos episodios de racismo y discriminación desde la victoria de Evo Morales en 2005, cuya presencia en el oriente, especialmente en Santa Cruz, era rechazada. Uno de los escenarios más conflictivos fue Asamblea Constituyente (AC), que se caracterizó porque por primera vez incluía y hacía partícipe a los indígenas de la construcción del nuevo Estado. Esto generó un choque cultural y político y develó la segregación racial hasta entonces existente. Por la complejidad del escenario, muchas de las discrepancias se trasladaron a las calles y Bolivia, en menos de dos años, registró al menos tres episodios de violencia étnico-racial y de clase se reprodujeron por el enfrentamiento entre organizaciones campesinas y el sector urbano.

Una década después, tras la implementación de la Ley en contra el Racismo y todo tipo de Discriminación y la hegemonía construida por el MAS, se podría pensar que el clivaje étnico y de clase había sido superado. En el campo simbólico, el rostro y la indumentaria indígena se

hicieron frecuentes en la conducción del aparato estatal, así como el *pijcheo* —masticado— de la hoja de coca se convirtió en habitual. También se introdujeron muchos rituales y símbolos indígenas dentro del Estado (tales como el Año Nuevo andino). No obstante, muchos indianistas como Carlos Macusaya o Pedro Portugal hablan de una folklorización de los indígenas, que más allá de promover la descolonización, los estigmatiza y utiliza. Si bien Evo era el rostro indígena en el poder, los campesinos-indígenas no gobernaban o al menos no estaban en cargos jerárquicos de relevancia.

Institucionalmente, el ejecutivo contó con representantes del área rural, aunque el número bajó de siete ministros en la primera gestión gubernamental del MAS, a la mitad en el 2019. Y si observamos las carteras del Estado que ocuparon, salvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, los campesinos indígenas ocuparon ministerios sociales o de menor envergadura. Si bien, el Legislativo, en su mayoría, está conformado por representantes de los sectores populares y campesinos, sucede lo mismo que en el Ejecutivo, las directivas de mayor importancia no están dirigidas por ellos. Es decir, a pesar de que muchos dirigentes campesinos y sindicales pasaron a formar parte de la burocracia estatal, los cargos de mayor jerarquía y de decisión aún pertenecen a la clase urbana y profesional.

Por otro lado, superados los primeros años en el gobierno, en el que el MAS desarticuló la oposición regional, se optó por cooptar y prebendalizar a los movimientos campesinos-indígenas destrozando su estructura sindical, con el único propósito de defender los intereses de este

partido. Aunque al interior de los movimientos afines al MAS señalan que este partido es su “instrumento político” y hay una simbiosis natural entre las organizaciones sociales y el MAS, la prebendalización de estas estructuras les quitó autonomía e independencia en la toma de sus decisiones.

Aquellas organizaciones que no se sometieron fueron divididas, creando organizaciones ‘paralelas’ que contaban con el financiamiento del gobierno. Precisamente es lo que sucedió con las principales organizaciones de tierras altas y bajas del movimiento indígena –Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano y Conamaq– y algunas otras más.

El alejamiento del MAS del movimiento indígena, en particular, se hizo evidente a partir del 2009, porque comenzó a impulsar numerosos proyectos extractivistas que pusieron en riesgo la biodiversidad y las formas de vida de las comunidades indígenas que habitan en estos territorios. La construcción de la carretera por el Tipnis, la construcción de represas y el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos del Bala y Chepete, en el Madidi y la TCO Pilon Lajas o Ivirizu, la aprobación en abril de 2018 de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía pese a la oposición de las comunidades que habitan la zona, son algunos de los más claros ejemplos que marcaron la ruptura definitiva con las comunidades indígenas.

Si bien el gobierno de Morales visibilizó e incluyó a los campesinos e indígenas dentro del aparato estatal, no logró establecer una inclusión real dentro del tejido

social, porque el racismo y la discriminación, a pesar de estar condenado por una ley, se continuaron reproduciendo en el ámbito privado.

EL RESURGIMIENTO DE LOS K'ARAS Y LOS T'ARAS

Volvamos a octubre-noviembre 2019. Tras las 48 horas de vacío en el poder, los bolivianos en la ciudad entraron en una psicosis producto del miedo y la sensación de indefensión. La desconfianza en el otro persistía y muchos pidieron la movilización del Ejército, porque la policía había sido superada por los hechos vandálicos producidos horas después de la dimisión de Evo Morales. En el área rural, llegaban rumores de que los *k'aras* les quitarían los bonos ofrecidos por el gobierno del MAS y no podrían ingresar a la ciudad, por lo que debían salir a defender la Bolivia de los pobres.

Así, sin la legitimidad que las urnas le dieron a Evo para gobernar desde el 2014, y sin que el Parlamento lograra sesionar para tratar su carta de renuncia, a través de un artículo refrendado por el Tribunal Constitucional, la senadora del Movimiento Demócrata Social (MDS), Jeanine Añez, asumió la presidencia. El Ejército y la policía salieron a las calles, y durante este despliegue militar policial, 30 campesinos-indígenas fueron asesinados en Cochabamba y en El Alto, estigmatizados por la violencia producida por algunos grupos de choque del MAS. Las masacres aún están siendo investigadas.

A lo largo de la historia boliviana, los indígenas han sido utilizados e instrumentalizados por la élite política. Este

caso no fue una excepción. Evo Morales junto al MAS lograron que los bolivianos del área rural por primera vez se sientan representados y reconocidos en el Estado, aunque en la última década el MAS haya abandonado sus preceptos discursivos iniciales, relegando el valor identitario indígena a cambio de lograr una construcción hegemónica nacional.

El discurso del odio y del miedo fue capitalizado por los sectores más conservadores de la sociedad; en este caso, también fue utilizado por el partido de gobierno para tratar de neutralizar las movilizaciones ciudadanas y generar apoyo en la comunidad internacional. Si bien, dentro de la movilización ciudadana de las “pinitas” no fue explícito, en algunos departamentos como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, las acciones de persecución, acoso, discriminación y amedrentamiento a quienes parecían ser

masistas encerraban prejuicios de raza y clase.

La construcción del “otro” como el enemigo, en una sociedad tan frágil como la boliviana, solo puede profundizar las diferencias que hasta el día de hoy no fueron solucionadas. Sin embargo, no es la primera vez que los políticos utilizan el discurso del odio y del miedo como elementos necesarios para la concentración del poder, porque es más fácil gobernar si se tiene un enemigo interno.

A pesar de la instrumentalización de la población campesino indígena por los partidos políticos, el estado boliviano no puede ser pensado sin la participación efectiva de las diferentes nacionalidades y pueblos indígenas reconocidos en la Constitución. La inclusión, esta vez, debe ser real.

MARÍA RENEÉ BARRIENTOS GARRIDO

AUTORES

| Mélang Barragán Manjón, Universidad Goethe de Frankfurt, mbarragan@usal.es, es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca.

| Angélica Abad Cisneros, Universidad de Cuenca, Ecuador, angelica.abad@ucuenca.edu.ec, es doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca, directora de la Maestría en Gestión Pública y Buen Gobierno, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

| José Manuel Rivas Otero, Universidad Sergio Arboleda, Colombia, jose.rivas@usa.edu.co, es doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global y profesor de la Universidad Sergio Arboleda.

| Lara Goyburu, Universidad de Buenos Aires (UBA), mlgoyburu@gmail.com, politóloga (UBA), magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT, Buenos Aires).

| **Facundo Cruz**, UADE, Argentina, cruzfacu@gmail.com, politólogo (UADE), magíster en Análisis, Gestión y Derecho Electoral (UNSAM) y doctor en Ciencia Política (UNSAM). Actualmente se desempeña como coordinador académico del Departamento de Gobierno (UADE), y como profesor e investigador (UBA-UADE).

| **Víctor Tricot**, Universidad de Gerona y SIT Study Abroad, España, victor.tricot@sit.edu. Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca.

| **María René Barrientos Garrido**, Universidad de Salamanca, barrientosmr@gmail.com, investigadora del Instituto de Iberoamérica.